

EL INTERIOR DEL INTERIOR

Los efectos de los más de ciento treinta días de conflicto que generó la resolución 125 - de aumento a las retenciones agropecuarias - se palpan cada vez más. También un modelo de administración del estado, que expresa buenas intenciones pero mantiene deudas como la redistribución de las riquezas, tantas veces mencionada como objetivo político por la Presidenta Cristina de Kirchner.

El principio del fin de la parte más belicosa del conflicto fue el voto "no positivo" del vicepresidente Cobos, como jefe del Senado, al proyecto de ley de retenciones, que el poder ejecutivo finalmente envió al Congreso para reemplazar a la cuestionada resolución 125. El Ejecutivo no quiso dar su brazo a torcer, pero salió bastante golpeado de aquella contienda. No pudo hacer valer su hegemonismo y corrigió en gran parte de lo visible al menos, el cuestionado doble comando de la presidenta por un lado y su esposo Néstor por el otro.

En la otra mitad de la cancha, la articulación de las cuatro entidades que encabezaron la protesta del campo, donde la Federación Agraria, que representa a los empresarios pequeños y medianos, quedó atada a las posturas de los sectores del agro más tradicionales, que en los últimos años han acumulado riquezas con el boom de la soja. Estos sectores concentrados, simbólicamente representados en la Sociedad Rural, fueron expresión de los intereses de los "pools" sojeros, donde hoy se concentra buena parte de la inversión financiera, local y extranjera.

Pero sería reduccionismo analizar la complejidad de lo que vivimos, simplificando de esta manera, porque también quedaron en esta mitad de la cancha las realidades del interior del país, que no se sienten integradas ni expresadas por las políticas del gobierno nacional, con beneficiarios de primera en el gran Buenos Aires, donde se concentra un tercio de la población del país, el mayor caudal electoral.

Las realidades provinciales, en un país extenso y disperso, con economías diversas y características distintas, hasta en lo cultural, que además ha sufrido los efectos dispersionistas de las políticas neoliberales con fracturas regionales, expresadas también en lo político, tuvieron un comportamiento dispar, según la relación de dependencia de sus gobiernos locales con el poder ejecutivo nacional.

Por cierto que las realidades del interior del país no son todas iguales. En el "cordón central", que constituyen las provincias Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con gran actividad agropecuaria, los productores - muchos de ellos no afiliados a las cuatro entidades que encabezaron el conflicto - tuvieron un protagonismo más destacado que en las provincias del norte, donde las empresas agropecuarias están concentradas en manos de las oligarquías feudales y la explotación laboral es mayor.

Está claro que la diversidad no es sólo geográfica y sería

equivocado limitarse a un problema de federalismo. Se trata también, y no de modo secundario, de un problema de injusta estructuración social. El desabastecimiento alimentario, por ejemplo, afectó con mayor gravedad, por el aumento de precios, a los pobres en general, pero más todavía a los pobres de las provincias más pobres, donde muchos de sus alimentos se encarecen por las largas distancias para el transporte. Son las provincias del norte, que continúan con sus luchas y sus reclamos, por más que no aparezcan en la prensa de Buenos Aires, que monopoliza los medios más poderosos.

La derecha política se vio fortalecida, aprovechándose de los errores del gobierno. Pero, mejor es que siga articulándose políticamente en espacios democráticos, para revertir esa maldita costumbre de ir a golpear las puertas de los cuarteles, aunque ahora aparezcan devaluados. Es que los juicios a los ex-militares genocidas emblemáticos en ex jerarcas como Menéndez, con condenas a prisión perpetua en cárcel común, o Bussi, que exageró su deficiencia respiratoria para cumplir la perpetua en su casa, sumados a otros que están en curso, contribuyen a que esas puertas sigan cerradas.

La Constituyente Social

Con menores evidencias de articulación política quedaron los opositores de signo contrario que le reclaman al gobierno coherencia entre las medidas que adopta y su discurso. Buena parte de quienes componen la CTA - Central de Trabajadores Argentinos - se ubica en esta franja, aunque sus máximos referentes se empeñen en aclarar que no se trata de ser "anti" ni "pro". Porque el esfuerzo está puesto en las propuestas.

En este sentido, esta Central, que aún con desarrollo desigual es el único movimiento social con presencia en todo el país, capaz de extender el debate y posibilitar algún tipo de articulación entre las diversas y disímiles organizaciones que lo integran, con gran esfuerzo ha planteado para los últimos días de octubre en Jujuy, la realización de la Constituyente Social, invitando a otros sectores sociales y políticos a debatir políticas hacia un proyecto de país, que las profundas carencias sociales siguen indicando como necesario de construir, no sólo en lo teórico sino como fuerza organizativa que en algún momento pueda tener expresión política propia, superando las limitaciones que plantea la continuidad de un modelo atado al viejo partidismo.

El mecanismo democrático que caracteriza la realización de estos grandes eventos promovidos por la CTA augura la posibilidad de un acertado diagnóstico realmente nacional, al contener múltiples experiencias de todas las zonas del país. Será una lectura fundamental para elaborar propuestas asentadas en esas realidades y no en los preconceptos ideológicos o intereses políticos sectoriales, que legítimamente

TAMBIÉN EXISTE



también anidan en experiencias pluralistas como ésta, aunque a veces retrasan la articulación en torno a las demandas comunes desde una perspectiva estratégica.

El Club de París

La responsabilidad de los más pudientes en el agravamiento de la situación de los sectores más necesitados, no exime las del gobierno nacional, que se empeña en negar la inflación real que ha diezmado el bolsillo de los argentinos, obligando a las eternizadas cúpulas sindicales, que para mantenerse acomodan el cuerpo con el poder político de turno, a plantear actualización salarial y la eliminación de la "tablita de Machinea", que establece aplicación impositiva a salarios superiores a los \$ 7.000.

Aún con el crecimiento económico de todos estos últimos años, los problemas sociales más graves siguen subsistiendo. Es cierto que más de veinticinco años de reinado del modelo neoliberal no pueden cambiarse en un lustro. Pero ya van cinco años intentando un rumbo diferente, sin que las raíces sean tocadas. La suspensión de pagos y el canje de bonos fueron aplaudidos en su momento como intento de romper algunos lazos de ahorcamiento internacional. Pero el posterior pago al FMI y ahora al Club de París fue criticado por algunas voces argumentando que debería haberse priorizado los dineros para cuestiones que todavía son emergencias sociales, como la movilidad de los haberes jubilatorios. El economista y diputado nacional Claudio Lozano añadió que "la deuda es ilegítima porque fue construida al final de la dictadura y sobre los finales de la convertibilidad asociada a la fuga de capitales". Otros economistas afirman, en cambio, que honrar esas deudas, después de bastante tiempo de tiraos internacionales, es un modo de mostrar autonomía en la decisión de la oportunidad del pago. Uno de ellos, Aldo Ferrer, dijo que se pagaron los 6.700 millones de dólares con recursos propios y eso significa que "el país está de pie y en pleno crecimiento". Se argumenta que no puede dejarse de pagar, ya que en un mundo tan interdependiente es imposible vivir aislados, principalmente de las fuentes internacionales de financiamiento. La realidad es la única verdad, decía Aristóteles y repetía Perón. En poco tiempo veremos si los beneficios llegan por fin a los que más los necesitan.

Para todos, todo

Otras cuestiones estuvieron instaladas como temas "nacionales". La re-estatización de Aerolíneas Argentinas

fue presentada como otro hecho consumado del fracaso privatizador del neoliberalismo, cuyos costos debe otra vez afrontar el estado, que es decir, desviar recursos que debieran destinarse a más educación, más vivienda, más salud, especialmente en los parajes más distantes y olvidados de las provincias más necesitadas y alejadas de los centros de poder. La decisión política del Ejecutivo nacional fue avalada por ley del Congreso de la Nación, lo que es positivo porque se avanza en calidad institucional. Pero el debate parlamentario sirvió además para poner en el tapete algunos aspectos, como el vaciamiento y la abultada deuda, que aparecían con "tufillo" a negociado, más aún estando en manos de los cuestionados funcionarios de esas áreas, el Ministro De Vido y el Secretario Jaime, que también reciben críticas por el proyectado "Tren Bala", que será ejecutado con capitales franceses. Mientras tanto la crisis del transporte ferroviario privatizado en la época menemista, encrespó el ánimo de los pacientes pasajeros que todos los días deben soportar el deficitario servicio, con el incendio de vagones y destrozos de magnitud en Buenos Aires.

Es evidente que en un país tan extenso y diverso - como siempre remarcamos - la política de transporte no es un tema menor y no puede estar en las exclusivas manos de funcionarios sospechados. El conocido cineasta, militante político y excandidato a presidente Pino Solanas acaba de presentar su película "La última estación", donde revitaliza este debate, denunciando los males acarreados por el furor privatizador, cuyos ejecutores siguen gozando de absoluta impunidad.

Las líneas aéreas de bandera que conecten a todas las provincias, la rehabilitación de las líneas ferroviarias que se han mantenido a pesar del deterioro producido por el abandono, la construcción de autopistas que en el marco de una nueva política vial, sirva a la integración comercial, además de acarrear mayor seguridad a los ciudadanos, son proyectos elementales si se quiere reponer un rol activo del estado al servicio de la justicia social.

También las obras hídricas y la racional explotación minera, que en estos últimos tiempos afortunadamente ha sido puesta en la agenda pública, a raíz del cuestionamiento a la explotación inescrupulosa a cielo abierto generadora de contaminación, sin los necesarios controles del estado y con una legislación protectora que todavía requiere de mayores avances para evitar la destrucción de recursos no renovables. Más aún cuando ya existió en nuestra propia historia el antecedente en la Constitución de 1949 que declaraba estos recursos como propiedad del estado. Y por lo tanto como bienes que deberían redundar en una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos argentinos y no para el enriquecimiento de reducidos grupos económicos, como sucede en la actualidad con la complicidad de algunos gobiernos provinciales. Pinceladas de un interior, del interior, que también existe.

Córdoba, Setiembre 2008

Luis Miguel Baronetto